



JESUS GONZALEZ SCHMAL

Saldo de la FEADP: Decepcionante y peligroso

No acabábamos de conocer la noticia del asesinato de José Armando Rodríguez Carreón, periodista-reportero del 'Diario en Ciudad Juárez', cuando apareció la del atentado al periódico local 'El Debate', de Culiacán, Sinaloa

Todo esto sin que la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra Periodistas (FEADP) de la Procuraduría General de la República (PGR) tenga la menor idea, ni haya desplegado esfuerzo alguno desde su creación para siquiera investigar y castigar uno solo de los 24 crímenes que tenían en proceso de averiguación previa en 2006, año en que fue constituida dicha Fiscalía especializada.

Es otra vez la pasividad o inutilidad de los servicios de procuración de justicia federal en el país, el mejor aliado de la delincuencia de todo tipo que prolifera a sabiendas de que las posibilidades de ser descubiertos es prácticamente nula.

De 2006 a la fecha, se ha duplicado el número de periodistas víctimas de su empeño por servir a la nación informando con todo detalle, y con señalamiento de responsables, el infierno de inseguridad en que se ha convertido el territorio nacional de sur a norte y de este a oeste.

Se pensó que los asesinatos de periodistas no se resolvían por las procuradurías de los estados porque los gobernadores que las controlan no pocas veces estaban implicados en los crímenes o, al menos, tienen intereses encontrados con los periodistas honestos e independientes que lo mismo denuncian las atrocidades del crimen organizado que las tropelías y trapacerías de los políticos locales que tienen asediados a sus gobernados con peculados, tráfico de influencias y otros ilícitos parecidos.

Se pensó entonces que para garantizar la imparcialidad de la investigación y la obtención de resultados para acabar con la impunidad, la solución era crear la Fiscalía Especializada que a través de las 31 delegaciones de la PGR en los estados se podría defender la libertad de expresión consagrada en la Constitución y en innumerables tratados internacionales firmados por México.

El saldo a la fecha es espeluznante. México ya ocupa el primer lugar en el mundo de víctimas en el desempeño del periodismo.

Es una vergüenza que a pesar del cambio de partido

en el gobierno federal, la libertad de expresión y, sobre todo, el derecho a la información del ciudadano, se ha ido perdiendo al grado que hoy mismo ya no hay medio de información en las zonas de mayor violencia en las que los periódicos locales se atreven a reportear los desmanes y las complicidades de policías y delincuentes, en las que siempre aparece un interés político caciquil que obliga a la prensa a guardar silencio.

Si la información es la fuente de la que se alimenta el buen juicio del ciudadano para tomar decisiones con conocimiento de causa en las democracias, en México ocurre que con la incondicionalidad de los grandes consorcios televisivos al régimen que informan lo que se les ordena y callan la verdad, así como la amenaza permanente y persecución a los medios libres e independientes, la realidad se vuelve trágica, el futuro incierto y cada día más negro.

El propio subprocurador de Derechos Humanos de la PGR, Juan de Dios Castro Lozano, no ahorró injurias contra los periodistas que le solicitaban protección y respeto a su profesión.

Todo ello conforma un cuadro patético en el que México tendrá que recurrir otra vez a la resistencia civil pacífica y activa para salvarse de quienes, dentro y fuera del gobierno quisieran privar a la Nación de la verdadera prensa libre que, en toda la historia, ha sido la garantía de la dignidad humana.

Un análisis objetivo del balance de la FEADP nos llevaría a concluir que en vano se creyó en la buena fe de las autoridades federales que se aprovecharon de la frustración existente entre los gremios de periodistas que veían incrementarse los delitos contra ellos, sin que hubiera autoridad interesada en detenerlos.

Hoy, a 24 meses de distancia, los resultados no sólo son decepcionantes sino dramáticamente peligrosos porque la pérdida de la última trinchera de defensa de los derechos públicos, que es la prensa independiente, está a punto de sucumbir.

